

EL PARLAMENTO BRITANICO EN 1979

Por GEOFFREY K. ROBERTS

LA SITUACION PARLAMENTARIA

La característica dominante en la situación parlamentaria de comienzos de 1979 era la constancia de que unas elecciones generales habrían de tener lugar antes de fin de año. Dadas las dificultades con las que se enfrentaba el Gobierno laborista y en especial su falta de una clara mayoría parlamentaria, parecía probable que las elecciones tuviesen lugar antes de las vacaciones de Pascua de Resurrección. En caso de no ocurrir así, tanto la mera necesidad como consideraciones tácticas podían muy bien llevar al Primer Ministro a elegir una fecha de comienzos de verano; posiblemente, incluso, la misma de las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, el 7 de junio.

El año nuevo había comenzado con malos augurios para el Gobierno laborista. Se habían producido varias brechas en el límite de contención salarial del 5 por 100: el personal de radio y televisión, los marinos mercantes, el transporte petrolífero y los vehículos de reparto. Y lo que era peor aún, otras brechas amenazaban con producirse: los empleados de administración local, los sectores peor remunerados del personal sanitario y, especialmente, la huelga de camioneros. En esta última, los piquetes de huelguistas habían actuado con tanta eficacia que los alimentos permanecían pudriéndose en los puertos, los almacenes no podían abastecer a las tiendas y los granjeros se veían en la imposibilidad de obtener piensos para sus animales. El Primer Ministro llegó a superar un voto de censura a su forma de llevar la huelga de camioneros por un margen de votos de 301-277, si bien sólo gracias al apoyo de los diputados nacionalistas escoceses y galeses que votaron, en este caso, a favor del Partido Laborista. El debate, en sí mismo, fue ya descorazonador para el Gobierno; varios

de sus partidarios de los últimos bancos habían apoyado al Gobierno de mala gana y tan sólo por evitar unas elecciones anticipadas, ya que estaban convencidos de que el control de salarios era un error de principio, ineficaz en la práctica y electoralmente impopular. Muchos diputados laboristas pensaban que el señor Callaghan había «perdido el tren» al no haber convocado elecciones el otoño anterior (1).

El debate también había puesto de manifiesto hasta qué punto el Gobierno basaba su supervivencia en los votos de los nacionalistas escoceses y galeses. Este apoyo era, no obstante, obviamente frágil e incierto y harto improbable de prolongarse más allá de marzo, época en que los referéndums sobre las leyes de disolución habrían de tener lugar. Si estas propuestas legislativas eran rechazadas por el electorado de Escocia y Gales, los partidos nacionalistas ya habían anunciado que intentarían forzar, por todos los medios a su alcance, unas elecciones anticipadas. Por otra parte, en caso de triunfar las propuestas, también desaparecerían todos sus motivos para apoyar al Gobierno laborista tan pronto como éstas pasasen a ser leyes. (Sin duda, en la campaña electoral para los escaños de las Asambleas locales, los partidos nacionalistas desearían distinguirse de la forma más nítida posible del Partido Laborista.)

A principios de año se daba como seguro que al menos el referéndum escocés se traduciría en un voto a favor de la devolución. Las encuestas indicaban que los votantes escoceses se pronunciarían a favor de la devolución en una proporción de 2:1, aunque también mostrasen que un alto número de votantes estaban todavía indecisos (2). Sin embargo, una vez que la campaña comenzó a intensificarse, la oposición a la devolución comenzó a aumentar. Los resultados de los referéndums, que tuvieron lugar el primero de marzo, fueron: *a*) una resonante derrota para la devolución, en Gales (80 por 100 votó en contra y sólo un 20 por 100 a favor), y *b*) una mayoría muy apretada en favor de ella, en Escocia (52 por 100 a favor por 48 por 100 en contra de las propuestas). No obstante, las regulaciones aplicables a los referéndums de devolución establecían en el 40 por 100 de *todos* los electores con derecho al voto el mínimo requerido de votos favorables para que el Parlamento procediese a la devolución. El resultado en Escocia no llegó a superar este requisito, ya que si bien se alcanzó un 52 por 100 de votos positivos, la asistencia a las urnas en Escocia no fue lo suficientemente elevada como para hacer que el 52 por 100

(1) «The Economist», 20 enero 1979; véase también GEOFFREY K. ROBERTS: *El Parlamento Británico*, en «Revista de Estudios Políticos», núm. 9, mayo-junio 1979, pág. 156.

(2) «The Economist», 30 diciembre 1978.

de votos favorables a la devolución constituyese el 40 por 100 de todos los votantes.

El Gobierno laborista se encontraba en un dilema. Si aceptaba las consecuencias de los resultados obtenidos, tendría que proponer al Parlamento que la legislación para la devolución fuese abandonada (aun cuando técnicamente fuera aún posible para la Cámara de los Comunes ignorar el resultado del referéndum y votar a favor de la prosecución de los trabajos legislativos en este tema). Sin embargo, era evidente que si el Gobierno hacía esto perdería toda esperanza de retener el apoyo de los votos de los diputados nacionalistas en los debates parlamentarios futuros, lo que equivalía a decir que tendría que convocar elecciones. Si, por el contrario, el Gobierno recomendaba al Parlamento ignorar los resultados de los referéndums y poner en práctica las propuestas de devolución —al menos en Escocia y basándose en que una mayoría había votado a su favor—, esto podría muy bien retenerle por algún tiempo el apoyo parlamentario de los nacionalistas escoceses, lo suficiente como para aprobar el presupuesto y alguna legislación más, pero ciertamente le haría perder también más votos aún sobre el tema de la devolución por parte de algunos diputados laboristas. Después de todo, la regla del «cuarenta por ciento» había sido introducida, más que nada, para aplacar los ánimos de la oposición existente, dentro de las filas laboristas al tema de la devolución. Así que de esta forma, también parecía evidente que el Primer Ministro no podría evitar unas elecciones anticipadas, ya que la derrota en el tema de la devolución sería una cuestión de «confianza», y haría, por tanto, necesaria o bien la dimisión del Gobierno o bien la disolución del Parlamento seguida de unas elecciones generales.

El señor Callaghan buscó evitar este dilema, ignorando el tema de la devolución y prosiguiendo con otros asuntos. En este sentido, ya había reafirmado en febrero su intención de permanecer como Primer Ministro hasta que la vida del Parlamento expirase en el otoño próximo siguiente (3). Los nacionalistas escoceses continuaron presionándole para que adoptase una decisión al respecto y el Gobierno perdió el 28 de marzo una votación crucial de confianza por tan sólo un voto (311-310) (4). A continuación, el Primer Ministro manifestaba que recomendaría la disolución del Parlamento, eligiéndose el 3 de mayo como fecha de elecciones generales. Esta

(3) «The Economist», 10 marzo 1979.

(4) Junto a los conservadores votaron en contra del Gobierno: 13 liberales, 11 nacionalistas escoceses y 8 unionistas del Ulster. El Gobierno tenía el apoyo de 2 miembros del Partido Laborista Escocés, 3 nacionalistas galeses y 2 unionistas del Ulster.

había sido la fecha elegida para las elecciones de los gobiernos locales, lo que complicaba las cosas (5), si bien iba a tener el saludable efecto de elevar la participación en las elecciones locales desde la baja cifra acostumbrada de un 25-30 por 100 hasta una próxima al 75 por 100, cifra usual de participación en elecciones generales.

Los conservadores se mostraban tan optimistas acerca de las elecciones como el Partido Laborista pesimista. Los sondeos llevaban dando al Partido Conservador una ventaja de más del 10 por 100 desde meses antes de las elecciones: la suficiente como para producir una mayoría cómoda, si bien mucho dependería de cómo los liberales y los nacionalistas escoceses fuesen capaces de retener su fuerza electoral de 1974. Las dos elecciones parciales celebradas en dos circunscripciones de tradición conservadora (Knutsford y Clitheroe) que tuvieron lugar en marzo, vinieron a confirmar un sustancial desplazamiento de votos hacia el campo conservador y un descenso en la participación laborista del voto total. El Partido Liberal —a pesar del caso Thorpe (véase *infra*)— también era pesimista. Los liberales asestaron otro golpe al Partido Laborista en las últimas elecciones parciales antes de las generales, celebradas el 29 de marzo en una circunscripción de Liverpool previamente en manos de los laboristas. Cambiaron una mayoría laborista de más de 6.000 votos en una mayoría liberal de más de 8.000. (El candidato liberal ganador de estas elecciones, David Alton, serviría como diputado durante sólo unos días, antes de que el Parlamento fuese disuelto; siendo reelegido de nuevo en las elecciones generales.)

La campaña electoral se planteó sobre los temas de la inflación, la política de rentas, la reforma sindical, la ley y el orden. Ley y orden llegarían a ser el punto más sobresaliente de la campaña cuando Airey Neave, político conservador, héroe de guerra e íntimo colaborador de Margaret Thatcher, fue asesinado por una bomba terrorista cuando salía en su coche de un garaje de las propias dependencias parlamentarias.

Aun cuando la declaración oficial de los resultados producidos se demoró en cierto número de circunscripciones, debido a la coincidencia de las elecciones parlamentarias con las elecciones locales, se hizo patente a las pocas horas de cerrar las cabinas electorales que los conservadores ganarían las elecciones por un margen sustancial. El aspecto más interesante de los resultados finales era la diferencia notable entre la arrolladora victoria conservadora en el sur de Inglaterra, los Midlands y Gales, y los muy

(5) Por ejemplo, se necesitaron papeletas de colores distintos y hubo escasez de urnas en donde depositar los votos.

limitados triunfos obtenidos en el norte de Inglaterra y en Escocia. Los liberales habían tenido algunos retrocesos, incluso el porcentaje de sus votos se había reducido en comparación con 1974; pero aun así retenían muchos de sus escaños y se colocaban en segundo lugar en varios distritos en donde se había pensado que iban a obtener resultados muy pobres. Los nacionalistas galeses y escoseses perdieron tantos votos y escaños que prácticamente fueron desplazados a la posición que ocupaban diez años antes. Ni los comunistas ni el derechista Frente Nacional obtuvieron muchos votos en distrito alguno.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1979

	Votos (%)	Avances o retrocesos en comparación con las elecciones de octubre de 1974	Escaños obtenidos
Conservadores	43,9	+ 8,1 %	339
Laboristas	36,9	- 2,3 %	268
Liberales	13,8	- 4,5 %	11
Nacionalistas Escoceses.	1,6	- 1,3 %	2
Nacionalistas Galeses ...	0,4	- 0,2 %	2
Otros	3,4	+ 0,2 %	13 *

(*) Estos trece escaños pertenecían todos a Irlanda del Norte.

Los conservadores ganaban 61 escaños, incluyendo siete de los nacionalistas escoceses y tres de los liberales, pero cedían seis a los laboristas. Entre los diputados laboristas derrotados se encontraban: Teddy Taylor (portavoz conservador en el Parlamento para asuntos escoceses), la señora Shirley Williams (secretaria de Estado para la Educación en el Gabinete del señor Callaghan) y tres liberales bien conocidos, Emlyn Hooson y John Pardoe (que había sido uno de los rivales de David Steel para el liderazgo del partido tras la dimisión de Jeremy Thorpe) y Jeremy Thorpe (6). La señora Thatcher, la primera mujer que llegaba al puesto de Primer Ministro en

(6) En el momento de las elecciones generales Jeremy Thorpe se hallaba a la espera de su juicio con cargos de conspiración e incitación al asesinato. Estos cargos, junto con todo el transfondo del caso en cuestión, había alcanzado una gran publicidad. El señor Thorpe fue absuelto en el juicio que finalizó el 22 de junio.

Gran Bretaña, formó un gabinete de 22 miembros, dos menos que el anterior de Mr. Callaghan; incluyendo en su Gobierno a Reginald Prentice, anterior ministro laborista.

Las únicas elecciones parciales en 1979, posteriores a las generales, fueron las de South-West Hertfordshire, celebradas en diciembre. Los conservadores mantuvieron allí su escaño, aun cuando por el bajo nivel de participación, su porcentaje de votos se vio de alguna manera reducido. Los liberales salieron bien parados, logrando un 23,6 por 100 de los votos, en contraste con el 16,2 por 100 que habían obtenido en mayo. A pesar de ello, en el cómputo total, se mantenían en tercera posición.

LA AGENDA PARLAMENTARIA

Aunque la intromisión de unas elecciones generales en mitad del año en curso condujo a cambios de detalle en las tareas parlamentarias, los temas centrales de la agenda de trabajo siguieron siendo más o menos los mismos. Con todo, la devolución de poder a las Asambleas de Escocia y Gales dejó de ser un tema de debate y los importantes textos legales que tenían que haber instituido estas Asambleas fueron rechazados en junio.

La situación económica era sin duda el tema más importante y afectaba además a otros muchos temas, tales como la pertenencia británica al Mercado Común, la autonomía de las autoridades locales de gobierno en los condados, las ciudades y los distritos condales y el control de la emigración.

Ninguno de estos temas era nuevo. Todos habían concentrado la atención de los Gobiernos conservadores y laboristas durante muchos años. Pero las prioridades establecidas por el Gobierno de la señora Thatcher eran nuevas, así como los criterios ideológicos que el nuevo Gobierno aplicaba a sus decisiones políticas.

a) *La economía*

Los conservadores no habían mantenido en secreto su intención de, en caso de ser elegidos, afrontar los problemas económicos de una forma drástica. Habían dejado bien claro, tanto en sus intervenciones parlamentarias anteriores a las elecciones como durante sus discursos electorales, que un futuro Gobierno conservador no seguiría un programa de gobierno que se limitase a ser una mera variante de los de las administraciones Heath, Wilson o Callaghan. Por el contrario, los conservadores confiarían fuertemente en una combinación de medidas estrictas de control de las disponibi-

lidades monetarias, con el fin de atacar la inflación en su raíz, y en el trabajo de las fuerzas de mercado; dando preferencia a éstas sobre la intervención gubernamental a la hora de evitar que unas exigencias salariales excesivas alimentasen la inflación. Paralelamente, se intentaría aliviar de forma dramática la pesada carga de la tributación directa, al tiempo que se recortarían los niveles de gasto público con el fin de estimular a la empresa privada.

El presupuesto, presentado el 12 de junio por sir Geoffrey Howe, Ministro del Tesoro (*Chancellor of the Exchequer*), fue un primer paso firme hacia estos objetivos. El tipo estándar de tributación fue recortado de un 33 a un 30 por 100; el tipo más alto de tributación se reducía de un durísimo 83 a un 60 por 100; aumentándose el número de las cantidades deducibles del monto total sujeto a tributación (lo que tenía el efecto inmediato de liberar de la obligación de declarar a una gran cantidad de trabajadores con un nivel bajo de salarios). Para compensar estas reducciones, se elevó el impuesto sobre el valor añadido a bienes y servicios hasta un 15 por 100, desde niveles previos de un 8 y un 12 por 100, si bien los productos alimenticios, material impreso —como libros y periódicos— y otros objetos considerados de primera necesidad quedaban excluidos de este impuesto. Los niveles previstos de gasto público habrían de ser reducidos en todos los departamentos, con la excepción de Defensa, y se anunciaban ulteriores reducciones en varios sectores gubernamentales. Asimismo, el ministro del Tesoro hacía ver, tanto en el Presupuesto como en posteriores declaraciones, su intención de retirar varios controles financieros, entre los que se incluían todas las restricciones sobre los movimientos de intercambio con el exterior y el sector bursátil.

Pero, aun cuando la audacia del presupuesto presentado fue bien recibida por los partidarios del Gobierno y por muchos comentaristas y expertos, y aunque la libra esterlina se mantenía considerablemente más fuerte que otras monedas (apoyada en la importancia estratégica de las reservas de petróleo del Mar del Norte), la tasa de inflación continuó incrementándose. Esto significaba, según la lógica monetarista del Gobierno, que las disponibilidades de capital tenían que ser restringidas a través del alza de los tipos de interés. La repercusión de estos incrementos en la amortización de hipotecas, junto con el aumento de precios producido por el impuesto sobre el valor añadido (VAT), neutralizaban de hecho gran parte del beneficio que las familias habían recibido a través de los recortes en la tributación. A finales de año, sólo las personas con rentas más elevadas podían mantener que se habían visto enriquecidas como resultado de la política del Gobierno.

La oposición culpaba al Gobierno del empeoramiento de la situación económica con altos tipos de interés, del desempleo creciente y de un porcentaje de inflación que volvía rápidamente a alcanzar niveles del 20 por 100. El Gobierno culpaba a la oposición del grado de inflación por haber prometido, cuando estaba en el poder, incrementos excesivos de salarios a muchos grupos de trabajadores de los servicios públicos y de las industrias nacionalizadas, sabiendo que estos incrementos tendrían que ser pagados o bien con aumentos en los impuestos o mediante empréstitos. A finales de noviembre se presentaba una moción en la Cámara de los Comunes criticando la estrategia económica del Gobierno, si bien esta moción era derrotada por un margen de votos de 311 contra 257.

A pesar de todo, los acuerdos salariales continuaron moviéndose a niveles muy altos. La Unión Nacional de Mineros convocó una consulta con sus afiliados para decidir si se aceptaba la oferta de un aumento en los salarios de un 20 por 100 o si se decidía aumentar las exigencias e ir a la huelga. Los mineros aceptaron la oferta y la señora Thatcher recibió con agrado esta decisión en una declaración suya en la Cámara de los Comunes. Con todo, dejaba bien sentado que otros grupos de trabajadores no deberían intentar conseguir el mismo incremento en el caso de empresas que no lo pudieran afrontar. Cuando la British Steel Corporation, empresa estatal con grandes déficits anuales, ofreció a sus trabajadores tan sólo un 2 por 100 de aumento, apoyándose en que no le era posible encontrar el dinero necesario para pagar más, se amenazó con una huelga del sector metalúrgico. El Gobierno dejó bien claro que no asignaría dinero público para dotar a la Corporación del dinero necesario para pagar más y que tampoco intervendría por otros conductos (7). Esta actitud suponía un fuerte contraste con la práctica del Gobierno laborista anterior, siempre buscando mediar en las huelgas del sector público. La huelga del metal comenzó, de hecho, en enero de 1980 y, en el momento que escribo el presente trabajo aún continúa. En diciembre de 1979 una moción de censura sobre los planes del Gobierno de cerrar varias plantas de producción de acero y de reducir la plantilla de la British Steel Corporation fue derrotada por un margen de 310-253.

El Gobierno empezó también a reducir las plantillas de funcionarios públicos. Lord Soames, ministro responsable de la Administración Pública, anunció en la Cámara de los Comunes el 6 de diciembre de 1979 que

(7) A finales de enero de 1980 esta huelga estaba perjudicando a otros sectores de la industria británica, incluyendo a las compañías de envasado de productos alimenticios y a los fabricantes de automóviles, sin que por entonces se vislumbrasen indicios de una solución próxima.

60.000 puestos de funcionarios civiles habrían de ser suprimidos antes de 1983, la mayoría de ellos por «desgaste natural» (es decir, no volviendo a llenar puestos que han quedado vacantes por retiro o defunción). El número de comités asesores y organizaciones similares en los sectores marginales de la administración habría de ser también reducido como parte del programa de ahorro en el sector público.

b) *La Comunidad Económica Europea*

La contribución neta del Reino Unido a los gastos presupuestarios de la Comunidad Europea era una partida en rápido aumento. Se estimaba, por ejemplo, que antes de 1981 la contribución británica traspasaría holgadamente la cifra de un billón de libras, varias veces más de lo que se previó en el momento de la incorporación. Se trataba de la contribución nacional más elevada de todas las de los Estados miembros y, en concreto, equivalía a 95 veces la contribución neta de Francia. Así, pues, tan sólo un 10 por 100 de ahorro en esta cantidad podía ayudar al Gobierno a lograr sus objetivos financieros con más facilidad. La señora Thatcher, en una conferencia-cumbre de jefes de Gobierno de los países miembros celebrada en Dublín, rechazó una reducción más modesta que la que ella sugería. A su vez, amenazó con vetar cualquier ajuste de precios futuro incluido en la Política Agrícola Común y con paralizar todos los demás temas de negociación, a menos que se concediese a Gran Bretaña un trato más justo. Su posición contó con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara de los Comunes, en donde el sentimiento anticomunitario había sido estimulado vivamente por los afilados incrementos de los costes de la Política Agrícola, por la negativa ilegal de los franceses a permitir la importación de corderos británicos y por una encuesta de opinión que mostraba cómo el 55 por 100 de la población parecía pensar que la adhesión de Gran Bretaña a la Comunidad Europea era algo negativo, contra tan sólo un 21 por 100 que pensaba lo opuesto (8).

(8) «Daily Telegraph», 4 diciembre 1979. Este sentimiento parece haber sido el responsable de la baja participación en las elecciones de junio en Gran Bretaña; sólo el 32 por 100 se molestó en votar. En parte, ésta podía también haberse debido al gran número de elecciones que habían tenido lugar en los meses anteriores a las elecciones para el gobierno local, varias elecciones parciales por vacante y, en Escocia y Gales los referéndums sobre la devolución.

c) *Asuntos extranjeros*

El papel del Parlamento en relación con el problema de Rodesia fue muy secundario comparado con el de las negociaciones entre líderes rodesianos mantenidas en Lancaster House bajo la presidencia de lord Carrington, secretario del Exterior. El Parlamento siguió la marcha de estas conversaciones con discusiones periódicas y, a mediados de diciembre, el propio Parlamento aprobaba rápidamente las leyes necesarias para un eventual *status* de independencia de Rodesia, incluyendo entre ellas la abolición de las sanciones económicas.

El progreso hacia un acuerdo en Irlanda del Norte era casi nulo, a pesar de que se anunció en noviembre que se mantendrían conversaciones entre todos los partidos a fin de discutir las diferentes opciones para la restauración del autogobierno de Irlanda del Norte. La decisión de los unionistas del Ulster (aunque no del partido protestante de Ian Paisley que había roto con los unionistas oficiales del Ulster) de boicotear las conversaciones parecía garantizar por anticipado que muy poco iba a conseguirse con ellas.

Un Libro Blanco del Gobierno estableciendo nuevas regulaciones restrictivas de la inmigración (y especialmente de la emigración de maridos y prometidos de mujeres con *status* de residente británico), produjo una fuerte controversia. Sin embargo, después del anuncio de algunas concesiones, el Libro Blanco fue aprobado en diciembre por una votación de 294-252. El Gobierno se ve claramente comprometido en este tema de las leyes de inmigración, ya que, si no es lo suficientemente estricto, algunos de los diputados situados más a la derecha del Partido Conservador podrán abstenerse, mientras que si es demasiado restrictivo, los miembros moderados le retirarán su apoyo.

d) *Otros asuntos*

La decisión de la señora Thatcher de prolongar la primera sesión parlamentaria hasta octubre de 1980, en vez de comenzar una nueva sesión en octubre de 1979 como hubiera sido lo normal, significaba que el recién elegido Parlamento tenía mucho más tiempo para debatir y tratar sobre el problema legislativo preparado por el Gobierno para la primera parte de su mandato. Así, varias propuestas del Gobierno se convirtieron en leyes en 1979 o en libros blancos que establecían los planes para legislación fu-

tura. Quizá, en el futuro, el punto más controvertido sea la Ley de Empleo que impondrá ciertos controles legislativos sobre el arma sindical de «formación de piquetes secundarios». Esta Ley de Empleo ofrecerá mejor protección a los individuos en aquellos casos en que los sindicatos obtengan el acuerdo de «tienda cerrada» en una empresa e impongan la afiliación sindical obligatoria; y promoverá el uso del voto secreto para la toma de decisiones sindicales sobre celebración de huelgas (9). Otras propuestas incluyen la expansión de la energía nuclear, una ley que conceda al Gobierno el establecimiento de controles más estrictos sobre los gastos de la administración local y una Ley de Educación en la que se proveen subsidios del Gobierno a aquellos padres que envíen a sus hijos a escuelas privadas de pago, en vez de a escuelas estatales, en el caso de que sus ingresos se hallen por debajo de un nivel dado.

EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO

En junio de 1979 se introdujo lo que podía considerarse como uno de los cambios más significativos del procedimiento parlamentario desde la segunda guerra mundial. Siguiendo a la publicación del informe del Comité Williams sobre Procedimiento Parlamentario, se decidió establecer un cierto número de comités selectos dentro de la Cámara de los Comunes «para examinar el gasto, la administración y la política» de los departamentos gubernamentales. Estos comités tendrían poder para acceder a personas y documentos, para nombrar personal investigador adecuado y para convocar audiencias públicas. De llegar estos comités a establecerse definitivamente, la medida significaría un aumento considerable en la capacidad fiscalizadora de la Cámara de los Comunes y ofrecería a los miembros del Parlamento una dimensión de su trabajo mucho más interesante que la actual. Tres claras limitaciones a su efectividad serían: *a*) que el presidente no recibiría ningún pago adicional (a diferencia de los presidentes de comités similares en otros países en los que existen); *b*) que no se le garantizaría a la Cámara de los Comunes tiempo para discutir todos y cada uno de los informes del

(9) Se llaman piquetes secundarios a aquellos que impiden la entrada a los trabajadores en centros de trabajo que no se hallan directamente involucrados en la huelga, pero que o bien se surten de los bienes y servicios que producen los huelguistas o bien producen bienes y servicios que pueden sustituirlos. Es de interés observar que el Tribunal para los Derechos Humanos se ha pronunciado contra el Reino Unido en un caso concerniente a la legalidad de la «tienda cerrada», sobre la base de que existe un derecho fundamental a la libre elección de afiliarse o no a un sindicato.

comité, y c) que hasta el momento, no se les han asignado dotaciones de investigación adecuadas, lo que colocará a estos comités en una situación de desventaja con relación a los recursos de los ministerios (10). En diciembre, los comités se reunieron para elegir a sus presidentes. Las presidencias fueron repartidas entre los dos grandes partidos, si bien los conservadores se reservaron la presidencia de los comités más importantes, incluyendo entre éstos Defensa, Asuntos Exteriores, el Tesoro e Industria. Cuando el Parlamento se aprestaba a disfrutar de su receso de Navidades, varios de estos comités ya habían celebrado sus primeras reuniones.

La British Broadcasting Corporation decidió abandonar sus retransmisiones regulares en directo de los turnos de interpelación parlamentaria. Se debía, en parte, a que los oyentes habían expresado su irritación por las ruidosas exclamaciones de los diputados cuando alguno de los ministros intentaba dar respuesta a alguna interpelación parlamentaria. La B. B. C. prometió que aún habría ocasionalmente retransmisiones en directo de interpelaciones parlamentarias, así como de debates y discursos importantes, como el discurso del Presupuesto; pero que otras retransmisiones de las sesiones parlamentarias serían difundidas en grabación diferida.

En diciembre, un Comité Selecto dictaminaba que el Parlamento debería tener un edificio adicional para albergar una biblioteca, salas de conferencias, despachos para los diputados y otros servicios. El coste estimado sería de 12 millones de libras. El presidente de este Comité, Norman St. John-Stevas, según ciertas informaciones periodísticas, llegaba a afirmar que no creía que hubiera legislatura alguna en el mundo que pudiera desempeñar su trabajo con las restringidas dependencias disponibles en Westminster (11).

LOS PARTIDOS Y EL PARLAMENTO

Los dos años anteriores a 1979 habían sido uno de esos raros períodos, desde el comienzo del siglo XX, en que los partidos minoritarios: los liberales, los nacionalistas galeses y escoceses y los unionistas del Ulster, habían sido capaces de ejercer el poder político e influenciar y tener influencia en el desenlace de los conflictos entre el Gobierno y la oposición en la Cámara de los Comunes; 1979, por otra parte, demostraba la irrelevancia e impotencia de estos partidos, una vez que se había librado la batalla de las elecciones generales. Verdaderamente, se hubiera podido añadir el partido

(10) «Sunday Times», 16 diciembre 1979.

(11) «Daily Telegraph», 13 diciembre 1979.

laborista a la lista de estos partidos, relativamente impotentes al menos para los cuatro o cinco años próximos. A diferencia de las administraciones Wilson o Callaghan que le habían precedido, el Gobierno Thatcher poseía una mayoría lo suficientemente amplia como para asegurarle, incluso, contra los peores resultados, en las elecciones parciales posteriores que pudieran sobrevenir. El Parlamento se había convertido, por el momento, en una institución para la crítica, el debate y la enmienda; pero, también, en definitiva, para la aprobación de las propuestas del Gobierno.

El Partido Laborista no sólo está padeciendo los problemas que corresponden a su papel de partido de la oposición. Tras una derrota electoral, siempre ha experimentado la necesidad de caer en un período de recriminaciones internas; y 1979 —año en el que el partido logró el más bajo porcentaje de votos desde 1931— no iba a ser una excepción. Callaghan fue criticado por no haber elegido una fecha anterior más favorable para la convocatoria de elecciones; el ala derecha del partido culpaba al ala izquierda por haber asustado al electorado y por haber animado a los sindicatos a que sabotearan la política de rentas del Gobierno laborista; el ala izquierda acusaba al resto del partido de haber diluido, hasta hacer irreconocibles, las doctrinas socialistas. Pero lo peor no había llegado aún. Durante la conferencia anual del partido, celebrado en septiembre, el ala izquierda, capitaneada por Tony Wedgwood-Benn, logró un importante triunfo al obtener la aprobación de los delegados para una revisión de las reglas internas del partido. En el futuro, los diputados laboristas en el Parlamento no tendrían ya más el derecho a ser reelegidos automáticamente como candidatos de su distrito, sino que tendrían que convencer a los miembros locales de su partido de que ellos merecían la reelección. En segundo lugar, el Comité Ejecutivo Nacional del partido (actualmente dominado por el ala izquierda) sería el encargado de redactar el manifiesto electoral del partido, una tarea que antes se dejaba en manos del líder y de sus colegas parlamentarios. Incluso fue derrotado un intento de hacer de la elección del líder un asunto de todo el partido. Por el momento, el líder seguirá siendo elegido por los miembros laboristas en la Cámara de los Comunes. Se decidió la creación de un Comité de Encuesta para buscar las posibles formas de poner en práctica estas decisiones de la Conferencia, si bien en este Comité, según todos los indicios, habría una mayoría de miembros del ala izquierda.

Esta batalla entre la izquierda y la derecha del partido ha llevado a algunos observadores de dentro y de fuera a especular sobre una posible escisión del Partido Laborista que dejase, por un lado, a los socialdemócratas del ala moderada en un sólo partido (quizá bajo la dirección de Roy Jenkins, cuando éste abandone su puesto de presidente de la Comisión de la

Comunidad Europea), y, por otro, a un partido socialista de ala izquierda, fuertemente influenciado por las ideas marxistas. Ocurra o no esta escisión, las perspectivas electorales para el Partido Laborista no parecen alentadoras. Cuando se hallaban en el poder, ellos se jactaban de que su «relación especial» con los sindicatos les iba a permitir dar a Gran Bretaña paz industrial y un bajo índice de inflación; sin embargo, las huelgas que tuvieron lugar durante sus años en el gobierno se hicieron más frecuentes y amargas, y el índice de inflación se disparó hacia arriba en el mismo instante en que la restricción artificial de los acuerdos salariales por decreto fue retirada.

No se puede afirmar que el Partido Liberal vaya a ver con buenos ojos la formación de un nuevo Partido Socialdemócrata, pero ellos mismos han pedido con frecuencia un nuevo despliegue de partidos que les permitiría coaligarse con elementos más moderados procedentes tanto del campo laborista como del conservador. El Partido Liberal parece haber sobrevivido al caso Thorpe y a la impopularidad de su pacto parlamentario con los laboristas sin haber sufrido demasiadas pérdidas electorales. Verdaderamente, su porcentaje de votos en las elecciones generales fue, con la excepción de las elecciones generales de 1974, el mejor obtenido desde la segunda guerra mundial. Pero ellos ahora no tienen influencia en el Parlamento. Su única esperanza reside en hacer un buen papel en las elecciones parciales (como ya lo hicieron en South-West Hertfordshire en diciembre). En el pasado, a los liberales les han sido siempre más favorables las elecciones parciales bajo gobiernos conservadores; ya que el voto conservador descontento vota en ocasiones a los liberales, mientras que con un gobierno laborista, los descontentos usualmente se abstienen.

Después de las elecciones, la oposición de los partidos del Ulster y de los partidos nacionalistas galés y escocés era especialmente desalentadora. Los protestantes del Ulster, en otro tiempo firmes partidarios de los Unionistas del Ulster, se encuentran ahora divididos entre su lealtad a la organización que dirige un Ian Paisley reacio a todo compromiso o la línea oficial más moderada de los Unionistas del Ulster. Ninguno de los dos partidos tiene ahora la influencia que los unionistas solían tener sobre el Partido Conservador diez años atrás. Los nacionalistas escoceses y galeses, reducido a dos su número de escaños y tras haber sufrido un grave retroceso en su fuerza electoral, parecen haber perdido su oportunidad al fracasar en su intento de asegurar la devolución. Ambos deben ahora afrontar la perspectiva probable de un retroceso aún más intenso en un período de política bipartidista.

CONCLUSION

Con las próximas elecciones generales que ya no tendrán lugar hasta el famoso 1984 de George Orwell, el papel del Parlamento como foro de los conflictos parece haber disminuido. La excitación política tendrá que ser buscada en el futuro más dentro de los propios partidos que en sus relaciones entre sí, como los propios conflictos del Partido Laborista parecen demostrar. No obstante, el Parlamento continuará jugando un papel de primera magnitud dentro de la política británica por otras razones. Es el escenario de revelaciones y pronunciamientos de gran importancia política, como lo ha sido en el caso de las revelaciones de noviembre sobre Anthony Blunt, el historiador del arte identificado como antiguo agente ruso, es un ejemplo reciente. También será de vez en cuando la palestra adecuada para las batallas políticas que trasciendan las ideologías de partido: el proyecto de ley para restringir la amplitud de los casos contemplados en la legislación sobre el aborto, que aún se encuentra en proceso legislativo, es un buen ejemplo de ello en el momento presente.

Gran Bretaña sigue siendo una democracia parlamentaria, pero ha entrado en un período de gobierno estable en el que el papel del Parlamento se ha tornado menos dramático y, quizá por eso mismo, más constructivo de lo que lo ha sido en los últimos cinco años.

APENDICE

PORCENTAJE DE VOTOS RECIBIDOS POR LOS PARTIDOS
LABORISTA, CONSERVADOR Y LIBERAL EN LAS
ELECCIONES GENERALES DE 1945

<i>Elecciones generales</i>	<i>Laborista</i>	<i>Conservador</i>	<i>Liberal</i>
1945	48,3	39,8	9,1
1950	46,1	43,5	9,1
1951	48,8	48,0	2,5
1955	46,4	49,7	2,7
1959	43,8	49,4	5,9
1964	44,1	43,4	11,2
1966	47,9	41,9	8,6
1970	42,9	46,4	7,5
1974 (*)	37,2	38,1	19,3
1974 (*)	39,3	35,8	18,3
1979	36,9	43,9	13,8

(*) En 1974 se celebraron dos elecciones generales.

